



RESOLUCION No. CSJATR18-286
Miércoles, 09 de mayo de 2018

Por medio de la cual se resuelve queja de Vigilancia Judicial Administrativa impetrada por la Sra. Ruby García Orozco contra el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla.

Radicado No. 2018 – 00188 Despacho (02)

Solicitante: Sra. Ruby García Orozco.

Despacho: Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla.

Funcionaria (o) Judicial: Dra. Margarita Vélez Verbel.

Proceso: 2011 – 01731.

Magistrada Ponente (E): Dr. JUAN DAVID MORALES BARBOSA.

El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.

En uso de las facultades conferidas en el numeral 6 del Artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el Acuerdo PSAA 8716 de 2011 de la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, procede a emitir resolución dentro de la vigilancia con radicado 2018 - 00188 con fundamento en lo siguiente:

I - RESEÑA DEL CASO

El presente trámite se inicia en atención a petición instaurada por la Sra. Ruby García Orozco, quien en su condición de parte interesada del proceso distinguido con el radicado 2011 - 01731 el cual se tramita en el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, solicita Vigilancia Judicial Administrativa del proceso en referencia, al considerar que ha existido un retardo, por parte del referido despacho judicial vinculado en llevar a cabo la audiencia solicitada.

La solicitud de vigilancia fue recibida en este Consejo Seccional, el 03 de mayo de 2018 y es necesario proferir decisión en atención a la petición instaurada.

II - COMPETENCIA

La **competencia** para adelantar el trámite de vigilancia judicial está asignada a la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura en el numeral 6 del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y conforme al artículo 2º del Acuerdo No. PSAA16-10559 del 9 de agosto de 2016, las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales se denominarán en adelante Consejos Seccionales de la Judicatura, situación que no afecta las competencias establecidas con anterioridad en la Ley y reglamentos, luego este Consejo Seccional de la Judicatura, es competente para emitir la decisión conforme al Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, en consideración a que la petición de vigilancia se refiere al trámite de un expediente cuyo conocimiento y etapas procesales adelanta un funcionario judicial, adscrito a la

Palacio de Justicia, Calle 40 No. 44-80 Piso 6 Edificio Lara Bonilla
Telefax: 3410159 www.ramajudicial.gov.co
Email: psacsjbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co
Barranquilla-Atlántico. Colombia



circunscripción territorial corresponde al Distrito Judicial de Barranquilla. El artículo primero del Acuerdo antes citado que reglamenta la vigilancia judicial administrativa determina lo siguiente:

“Competencia. De conformidad con el numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, corresponde a la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura del país, ejercer la Vigilancia Judicial Administrativa para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de los despachos judiciales ubicados en el ámbito de su circunscripción territorial....

La vigilancia judicial es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura y de la facultad de Control Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.”

III – TRAMITE

Constituye premisa normativa dentro del presente trámite, el Acuerdo PSAA11-8716 del 2011 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, reglamento de carácter permanente orientado a garantizar que la labor de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se ejerza de manera oportuna y eficaz, trámite que bien puede iniciarse de oficio o a petición de la parte que aduzca interés legítimo y debe recaer sobre acciones u omisiones específicas en procesos singularmente determinados (Artículo tercero del PSAA11-8716)

El procedimiento para adelantar vigilancia administrativa, se describe en el artículo segundo del citado Acuerdo, indicando los siguientes pasos:

- a) *Formulación de la solicitud;*
- b) *Reparto;*
- c) *Recopilación de la información;*
- d) *Apertura, traslado y derecho de defensa;*
- e) *Proyecto de decisión;*
- f) *Notificación y recurso;*
- g) *Comunicaciones.*

Conforme a lo anterior, en cuanto a la actuación adelantada en este Consejo Seccional, se evidencia que luego de recibir la queja el 03 de mayo de 2018, se dispone repartir la respectiva solicitud, correspondiéndole su conocimiento y trámite a este Despacho; seguidamente se decide recopilar la información en auto del 04 de mayo de 2018; en consecuencia se remite oficio número CSJATO18-592 vía correo electrónico el 07 del mismo mes y año, dirigido a la **Dra. Margarita Vélez Verbel**, Jueza Octava Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, solicitando informe bajo juramento sobre la actuación procesal dentro del proceso distinguido con el radicado 2011 - 01731, poniendo de presente el contenido de la queja.

Dentro del término concedido por esta Corporación a la Jueza Octava Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla para que presentara sus descargos, la funcionaria judicial allegó respuesta en oficio de fecha 09 de mayo de 2018, en el que se argumenta lo siguiente:

“(...)MARGARITA VELEZ VERBEL identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma en mi condición de funcionaria judicial, JUEZ OCTAVA (8°) PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, por medio del presente me permito dar respuesta al oficio No.CSHATO18-592 de fecha 09 de mayo del presente año, en el que se me solicita remita información detallada sobre el trámite del

proceso de rad: 08001-60-01067-2011-01731, el cual responde en los siguientes términos:

ACTUACION	FECHA
Imputación de cargos por el delito de Lesiones Personales Culposas.	27 de enero del 2016
Escrito de acusación fue presentado.	25 de Abril del 2016
Acta de reparto fue emitida	25 de Julio del 2016
Se aboca conocimiento por el despacho del y se fija fecha para audiencia de formulación de acusación para el día 17 de Noviembre del 2016.	28 de septiembre del 2016
El señor fiscal se encuentra ausente dado que presenta quebrantos de salud.	17 de Noviembre del 2016
El señor fiscal 21 local encargado DR. JULIO LOPEZ GONZALEZ, manifiesta al despacho por comunicación telefónica que su madre se encuentra en operación médica por lo que no puede concurrir.	06 de Febrero del 2017
El despacho no puede adelantar la audiencia dado que se encuentra ocupado en otra audiencia.	16 de Mayo del 2017
Se aplaza la audiencia por problemas de fluido eléctrico en la sala de audiencias.	31 de Agosto del 2017
El despacho se halla ocupado en otra diligencia razón por la cual se aplaza.	02 de Noviembre del 2017
Se fija nuevo fecha por auto aparte dado que se reprogramo, la audiencia por que el despacho estaba ocupado en responder tutelas y finalmente se fija nueva fecha para el desarrollo de la audiencia el día 20 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 08:00 AM.	20 de Abril del 2018

Anexo, Copias del expediente que indica el trámite del proceso y estepas procesales dispuestas.

En los anteriores términos descorro el traslado que se nos hace de la carpeta referenciada.”

Seguidamente, esta Judicatura, procedió a revisar los documentos que acompañan los descargos presentados por la **Dra. Margarita Vélez Verbel**, Jueza Octava Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, constatando que mediante auto se programó la audiencia para el 20 de junio de 2018.

IV – PROBLEMA JURÍDICO

Según lo expuesto el **problema jurídico** que se presenta se refiere a determinar si de conformidad con los hechos planteados se ha cometido falta contra la eficacia de la administración de justicia que amerite disponer apertura de Vigilancia Judicial y si es procedente disponer los efectos indicados en el Acuerdo PSAA11-8716 del 2011, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el trámite del proceso de radicación 2011 - 01731.

V – CONSIDERACIONES

Al describir el marco normativo de la Vigilancia judicial, es necesario observar que constituye normatividad rectora en el presente trámite, el Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011 expedido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y conforme a la reglamentación allí establecida, corresponde a este Consejo emitir decisión debidamente motivada “sobre si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia” en el preciso y específico proceso o actuación judicial que se trata, así se indica en el artículo séptimo del Acuerdo en cita, siguiendo los parámetros trazados en la Ley Estatutaria de la administración de justicia, artículo 101 numeral 6, en relación con el artículo 4 de la misma Ley, siguiendo los lineamientos del art 228 de la Constitución Nacional.

Según lo anterior, en el ejercicio de la vigilancia judicial, se resalta en el artículo primero del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, el principio de celeridad, al establecer que precisamente su ejercicio tiene por objeto que la justicia se administre de manera oportuna y eficaz. Se pretende con ello en consecuencia eliminar retrasos injustificados y obtener el ejercicio de una justicia pronta y cumplida en beneficio de quienes acuden en calidad de usuarios a los estrados judiciales, para obtener el cumplimiento efectivo del deber plasmado en el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia, modificado por el artículo primero de la Ley 1285 de 2009, según la cual “la administración de justicia debe ser pronta y cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento”.

En este orden de ideas, la vigilancia judicial de carácter administrativo hace especial énfasis en la necesidad de verificar la “oportunidad y eficacia de la administración de justicia”, siguiendo los lineamientos constitucionales establecidos en el artículos 228 de la Constitución Política que expresa:

“Artículo 228: “La administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la Ley y en ellas prevalecerá el Derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. (Subraya para resaltar la idea)

Además, la misma Constitución da directrices encaminadas a reglar la eficacia de la administración de justicia cuando indica:

Artículo: 257: “Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la judicatura cumplirá las siguientes funciones:

(...) 3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, (...)

De manera consecuente con la directiva anterior, a fin de ampliar el análisis jurídico de las disposiciones que rige el trámite de vigilancia en referencia, se impone considerar los lineamientos establecidos en el artículo 101, numeral 6 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia que señala:

“Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las Siguiete funciones:

...6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama”,

La disposición transcrita, fue reglamentada mediante Acuerdo No. PSAA11-8716 expedido el 6 de octubre de 2011 por la otrora Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual además de propender por la eficacia de la Administración de justicia, de manera expresa se resalta el deber de respetar la independencia judicial como principio esencial de la administración de justicia, siguiendo así la orientación Constitucional establecida en el artículo 228 de la Carta Fundamental y la directriz Estatutaria establecida en la Ley 270 de 1996 en su artículo quinto.

El reglamento de la vigilancia judicial de manera particular indica en el artículo catorce del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, lo siguiente:

“Independencia y Autonomía Judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones.”

El principio de independencia judicial, no solo se resalta en la disposición transcrita, sino que de manera específica la Circular PSAC 10-53 del 10 de diciembre de 2010 emitida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, indica:

“(…) al analizarse la competencia atribuida en el artículo 101 numeral 6 de la Ley 270 de 1996 a los Consejos Seccionales, es claro que apunta exclusivamente a que se adelante un control de términos, en aras de velar por una administración de justicia oportuna y eficaz, sin que de manera alguna se pueda utilizar este mecanismo para ejercer una indebida presión sobre los funcionarios judiciales, o para influir en el sentido de sus decisiones. No podrán por tanto los Consejos Seccionales- Salas Administrativas- indicar o sugerir el sentido de las decisiones judiciales, la valoración probatoria, la interpretación o aplicación de la Ley y en fin nada que restrinja su independencia judicial en el ejercicio de su función judicial.”

Se resalta en la Circular antes citada, lo preceptuado en el artículo 228 de nuestra Carta Fundamental, según el cual se imprime especial protección al principio de independencia judicial, siguiendo orientación de Normas Internacionales, entre ellas: la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.10), el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, (Art.14), La convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.1) y el Estatuto del Juez Iberoamericano (artículos 1, 2, y 4).

En torno a la eficacia y eficiencia, habrá de entenderse siguiendo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, el deber de impartir pronta y cumplida justicia, mediante la racionalización de elementos disponibles y la aplicación de procedimientos legales correspondientes, pretendiéndose obtener con ello una reducción en los niveles de atraso, el efectivo cumplimiento de la gestión judicial y el trámite oportuno de cada etapa procesal, dándose un cumplimiento efectivo a los términos judiciales.

- **De Las Pruebas Aportadas Por Las Partes:**

Al estudiar la solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa suscrita por la Sra. Ruby García Orozco, quien en su condición de parte interesada dentro del proceso distinguido con el radicado 2011 - 01731 el cual se tramita en el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, aportó como prueba los siguientes documentos:

- Copia simple de auto de 28 de septiembre de 2016 mediante el cual se avoca conocimiento del proceso referenciado, entre otras disposiciones.

- Copia simple de auto de 17 de noviembre de 2016, mediante el cual se fija nueva fecha para realizar audiencia de acusación el 06 de febrero de 2017 a las 08:20 A.M.
- Copia simple de acta de audiencia de acusación de 06 de febrero de 2017, mediante la cual se fija nueva fecha para audiencia de acusación el 16 de mayo de 2016.
- Copia simple de auto de 08 de junio de 2017, mediante el cual se fija nueva fecha para realizar audiencia de acusación el 31 de agosto de 2017 a las 09:00 A.M.
- Copia simple de auto de 22 de septiembre de 2017, mediante el cual se fija nueva fecha para realizar audiencia de acusación el 02 de noviembre de 2017 a las 08:40 A.M.
- Copia simple de auto de 18 de diciembre de 2017, mediante el cual se fija nueva fecha para realizar audiencia de acusación el 20 de abril de 2018 a las 3:40 P.M.

Por otra parte de la **Dra. Margarita Vélez Verbel**, Jueza Octava Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, al momento de presentar sus descargos, allegó los siguientes documentos:

- Copia simple de auto de 27 de enero de 2016, proferido por el Juzgado Quince Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, mediante el cual se constata audiencia de formulación de imputación.
- Copia simple de acta de reparto de 22 de agosto de 2016.
- Copia simple de auto de 28 de septiembre de 2016 mediante el cual se avoca conocimiento del proceso referenciado, entre otras disposiciones.
- Copia simple de auto de 17 de noviembre de 2016, mediante el cual se fija nueva fecha para realizar audiencia de acusación el 06 de febrero de 2017 a las 08:20 A.M.
- Copia simple de acta de audiencia de acusación de 06 de febrero de 2017, mediante la cual se fija nueva fecha para audiencia de acusación el 16 de mayo de 2016.
- Copia simple de auto de 08 de junio de 2017, mediante el cual se fija nueva fecha para realizar audiencia de acusación el 31 de agosto de 2017 a las 09:00 A.M.
- Copia simple de auto de 22 de septiembre de 2017, mediante el cual se fija nueva fecha para realizar audiencia de acusación el 02 de noviembre de 2017 a las 08:40 A.M.
- Copia simple de auto de 18 de diciembre de 2017, mediante el cual se fija nueva fecha para realizar audiencia de acusación el 20 de abril de 2018 a las 3:40 P.M.

- **Del Caso Concreto:**

Según lo anterior se procede a emitir **consideraciones finales** en torno al análisis de la queja presentada el pasado 03 de mayo de 2018 por la Sra. Ruby García Orozco, quien en su condición de parte interesada dentro del proceso distinguido con el radicado 2011 - 01731 el cual se tramita en el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, en la que aduce la existencia de un retardo, por parte del referido despacho judicial vinculado en llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación.

Sin embargo, con base en lo expuesto en los descargos allegados por parte de la **Dra. Margarita Vélez Verbel**, Jueza Octava Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, los cuales se considera rendidos bajo la gravedad del juramento, presenta un cuadro donde relaciona las actuaciones surtidas dentro del proceso, además remite copia de los autos proferidos por el recinto judicial dentro del proceso relacionado, donde se constata que mediante auto de 19 de abril de 2018 se fijó como nueva fecha para audiencia de acusación el 20 de junio de 2018.

Esta Corporación observa que la mora en llevarse a cabo la audiencia de formulación de acusación se debe a situaciones ajenas a la empleada judicial, por cuanto el Fiscal asignado al caso se ha ausentado en algunas de las fechas fijadas para la audiencia, también se desprende de los autos allegados, que se han suspendido audiencias por fallas en el fluido eléctrico de la sala de audiencias, razones por las cuales se evidencia que el correcto desempeño por parte de la Jueza requerida dentro del proceso, es por ello que no se le dará apertura al trámite de Vigilancia Judicial Administrativa, como se dirá en la parte resolutive, sin embargo, por más que la responsabilidad principal recae en factores externos del despacho, esta Seccional procederá a instar a la titular del recinto judicial con la finalidad que en lo sucesivo no se presenten mora de más de cinco (5) entre fechas de audiencias.

Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo de Tutela T-230 del 13 de abril de 2013 indico: *“No obstante, la jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”*.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-803 de 2012, señaló: *luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.*

Lo anterior no obsta para recordar el deber de atender los asuntos sometidos a estudio del juzgado vinculado dentro de los límites del artículo 4 de la ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1° de la ley 1285 de 2009, según el cual la administración de justicia debe ser pronta y cumplida, a fin de evitar inconformidades en los usuarios de la administración de justicia y el ejercicio de acciones que afectan la buena imagen institucional.

Así las cosas, en el estudio del caso sometido a consideración, este Consejo no encontró mérito para considerar la existencia de una situación contraria a la oportuna y correcta

administración de justicia a la luz del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, por parte de la Jueza Octava Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla. Toda vez que la funcionaria argumenta en su favor, que la suspensión en varias oportunidades de la audiencia de formulación de acusación se deben a factores ajenos al correcto desempeño de su función, que mediante auto de 19 de abril de 2018 se fijó nueva fecha para llevar a cabo la mencionada audiencia, superando la situación de inconformidad planteada por el quejoso, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 6 del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, por tanto, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7^o1 del Acuerdo PSAA-11 8716 de 2011, este Consejo Seccional estima que no es procedente aplicar los correctivos y anotaciones del mencionado acuerdo, a la **Dra. Margarita Vélez Verbel**, Jueza Octava Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla.

En consecuencia, y de conformidad con las consideraciones esbozadas en precedencia, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico,

RESUELVE:

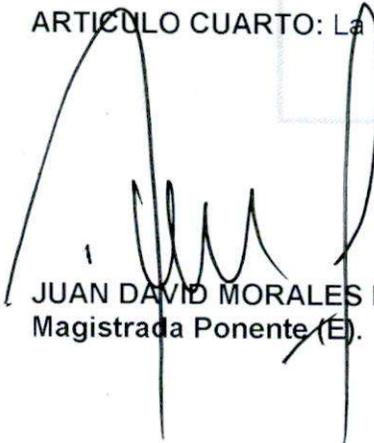
ARTÍCULO PRIMERO: No dar apertura al trámite de vigilancia judicial administrativa por las actuaciones en el proceso distinguido con el radicado No. 2011 - 01731 del Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, a cargo de la funcionaria **Dra. Margarita Vélez Verbel**, al no ser posible imponer los efectos del Acuerdo 8716 de 2011, según las consideraciones.

ARTICULO SEGUNDO: Instar a la **Dra. Margarita Vélez Verbel**, Jueza Octava Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, para que en lo sucesivo no extienda tanto las fechas entre audiencias y en el evento de existir fallas técnicas las ponga de presente ante la DESAJ y si existen excusas reiteradas por las partes y/o fiscalía ejerza los respectivos controles y amonestaciones.

ARTICULO TERCERO: Comunicar al servidor(a) judicial y al quejoso de la vigilancia judicial administrativa, por correo electrónico o cualquier otro medio eficaz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011.

ARTICULO CUARTO: La anterior decisión se expide conforme a la ley y al reglamento

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


JUAN DAVID MORALES BARBOSA
Magistrada Ponente (E).


CLAUDIA EXPOSITO VELEZ
Magistrada.

¹Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas.